

MAPA VIOLENTO Y FORMAS DE INTERVENCIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DE LOS GRUPOS ARMADOS EN EL CARIBE COLOMBIANO

LAI, Freie Universität Berlin, conversatorio online
Diciembre 12 de 2023

INTRODUCCIÓN

La región del Caribe atraviesa una serie de condiciones complejas en materia de seguridad, que de hecho, hacen parte de las dinámicas históricas de la región y de los poderes criminales tanto de estructuras armadas ilegales como de composición de elites locales con claros nexos con organizaciones ilícitas. Visiblemente los departamentos como Cesar, Bolívar y Magdalena mantienen corredores estratégicos para grupos armados como el ELN, mientras que en departamentos como la Guajira son visibles las disidencias de las FARC.

En gran parte de estos territorios el control territorial de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y particularmente en la Sierra Nevada de las Autodefensa Conquistadoras, sostiene la hipótesis de un conflicto multi-local y una diversidad de usos de la violencia para el mantenimiento de las estructuras delictivas. Desde esta perspectiva, realizar un análisis particularmente a las interacciones, relaciones o afectaciones que se tejen de forma compleja entre los grupos armados ilegales y la política electoral,

permiten evidenciar una serie de patrones que van desde la financiación de candidatos y partidos políticos, las autorizaciones a participar en política o el sabotaje, hasta el control directo de recursos de la administración pública y su respectiva distribución, con efectos directos en la legitimidad social y/o la construcción de clientelismos armados.

De esta manera, el presente policy brief busca de manera inicial establecer un contexto de dichas dinámicas político-electorales con las estructuras armadas ilegales, discutir sobre los patrones e interacciones constituidas en la región del Caribe, y visibilizar posibles lineamientos de política pública a nivel general en dicha materia.

“en las zonas de los Montes de María confluyen grupos armados organizados y grupos delincuenciales también organizados los cuales han establecido un orden político territorial donde han podido diversificar un panorama de gobernanza haciendo uso de la fuerza para constreñir electoralmente a la población” Dayana Fontalbo Arroyo

CONTEXTO

Entorno al desarrollo y resultado de las elecciones regionales realizadas en Octubre de 2023 puede observarse que los diversos grupos armados han logrado infiltrarse en la política local de la región Caribe mediante estrategias como la creación o utilización de empresas para participar en procesos de licitación, especialmente como contratistas de obras públicas. Este mecanismo les permite legitimar ganancias ilícitas. En otros casos, los grupos armados colocan personal en entidades públicas con el propósito de obtener información crucial o cooptar a funcionarios estatales.

En territorios como la Guajira, operan grupos armados organizados y delincuenciales que se involucran en dinámicas de crimen organizado internacional, principalmente con países como Venezuela, donde confluyen diversas fuentes de ingresos criminales. Estas organizaciones condicionan áreas urbanas y rurales a través de prácticas de lavado de dinero, especialmente en actividades como el microtráfico, que resultan más intensas y difíciles de detectar.

Una característica común en las principales ciudades del Caribe es que los grupos criminales logran establecer modelos de gobernabilidad que sirven a sus intereses. Persisten los procesos de financiamiento de grupos políticos por parte de organizaciones criminales, asociando intereses corruptos en territorios como Córdoba y Antioquia.

Este último, marcado por el cultivo y procesamiento de cocaína, proporciona un recurso estructural para

las dinámicas electorales, creando órdenes políticos territoriales que diversifican las gobernanzas criminales y fortalecen las estrategias organizativas políticas-institucionales.

Estas prácticas han generado una red de crímenes que incluyen asesinatos, extorsiones, reclutamiento forzoso, tráfico de drogas, armas y personas, así como minería ilegal. Esto establece una simbiosis entre la violencia, la gobernabilidad criminal y la gobernabilidad institucional.

Históricamente, la región del Caribe ha presenciado el rearme de grupos armados con el objetivo de mantener cierto poder gamonal. La política regional se ha percibido como un instrumento para afianzar el control de familias y clanes con vínculos criminales. Esto se evidencia en la memoria colectiva con personajes como el famoso narcotraficante y paramilitar Hernán Giraldo en Santa Marta, cuyas prácticas electorales facilitaron la obtención de alcaldías y gobernaciones en colaboración con organizaciones paramilitares. En el Magdalena, diferentes senadores y representantes fueron condenados por tener estrechos vínculos con paramilitares (parapolítica), tendencias que parecen resurgir en la región.

“lo que está sucediendo en el sur de Bolívar con presencia no solamente de grupos de guerrilla del ELN y de algunas disidencias sino también de grupos paramilitares, donde la ciudadanía y sobre todo los líderes y lideresas sociales están siendo asesinados y en otras ocasiones les están haciendo hasta montajes en procesos jurídicos y penales”
Einer Lopez Diaz

DISCUSIÓN

Los procesos de investigación que exploran la dinámica político-electoral y su relación con organizaciones criminales han revelado diversos patrones de intervención, cada uno con sus particularidades, como la dinámica propia del territorio, la capacidad militar del grupo armado y la interacción con la élite local, entre otros factores.

De forma histórica en Colombia, las interacciones entre política electoral y movimientos insurgentes se han vinculado al tutelaje de organizaciones legales, actuando como vanguardias en el movimiento social o la base social con intervención en la dinámica política a nivel local, regional y nacional.

Dentro de los patrones de interacción identificados entre grupos armados ilegales y la política electoral, se destaca el uso de "avales", que implica permitir o vetar candidatos. Otros patrones incluyen la financiación de campañas y la distribución de recursos públicos, creando clientelismo armado (por ejemplo, el ELN en el Arauca). También se observan casos híbridos que no solo tutelan las campañas, sino que supervisan las administraciones (por ejemplo el Bloque Magdalena de las AUC).

En términos de motivaciones, el control o condicionamiento de regímenes políticos locales por parte de grupos armados ilegales se puede entender como una estrategia para acceder a finanzas públicas que, al distribuirse, se convierten en formas de legitimidad e incluso impunidad, ya que escapan al control legal.

Otro enfoque implica la inserción de cuadros en la administración pública, generando burocracias vinculadas a los aparatos armados y movilizándolo en intereses propios. En territorios en disputa, se observan dinámicas de sabotaje, amenazas o acciones como la quema de urnas para desestabilizar la contienda política cuando los intereses representados en los candidatos son contrarios al del grupo armado.

Finalmente, el contexto actual de violencia en Colombia se entiende como una transición del conflicto armado clásico e histórico hacia un escenario de múltiples actores armados políticos, pero no ideológicos. Estos actores controlan territorios específicos y participan en economías ilegales, reflejando una expresión de violencia armada sin un hegemón violento.

“estos grupos establecen órdenes sociales desarrollan normas de convivencia pero esas normas de convivencia también regulan la interacción entre gobernantes y gobernados y ellos son los gobernantes de los territorios porque en Colombia todavía estamos analizando nuestra guerra con los marcos de interpretación de la Guerra Fría”

Luis Fernando Trejos

LINEAMIENTOS EN POLÍTICA PÚBLICA

1. Relación histórica violenta y elite local:

Es esencial que los análisis, investigaciones y acciones políticas, especialmente con perspectivas a la paz total, la política criminal y la seguridad

se centren en un estudio específico de las dinámicas e interacciones regionales. Esto debe incluir la identificación clara de los poderes militares de las organizaciones ilegales, sus prácticas de inserción en las dinámicas políticas y electorales, así como los vínculos entre control político, el territorial y el criminal, al igual que el poder de familias, clanes u organizaciones de base social. Se debe considerar también la influencia histórica de macro-estructuras como las AUC, las FARC-EP y el ELN en estas dinámicas.

2. Control de los recursos de administración pública y las bases sociales:

En relación con los patrones de interacción entre estructuras criminales y la política electoral, es crucial implementar medidas para prevenir y controlar de manera efectiva los presupuestos locales y regionales. Esto implica fomentar la construcción de veedurías institucionales que eviten la cooptación administrativa por parte de organizaciones delictivas.

La transparencia en aspectos como la contratación pública, la regulación de las prácticas electorales y la reforma de los partidos políticos puede contribuir a reducir los riesgos y restar legitimidad criminal en las bases sociales territoriales.

3. Compresión del contexto multinivel y de constelación de las violencias:

Las expresiones tradicionales del conflicto armado en Colombia, donde grandes estructuras y poderes hegemónicos territoriales distribuían el

poder político y económico, no son suficientes para explicar las actuales dinámicas de violencia territorial. Los conflictos han evolucionado hacia procesos más complejos de micropoderes ilegales, control de rentas ilícitas, cooptación institucional, minimización del carácter ideológico y crimen transnacional. Es esencial adoptar enfoques que se adapten a esta nueva realidad multinivel y de constelación de violencias.



Funded by

DFG Deutsche
Forschungsgemeinschaft
German Research Foundation

Contacto: Jan Boesten, PhD (UBC)
Pagina de web: <https://www.lai.fu-berlin.de/homepages/boesten/index.html>
Email: jan.boesten@fu-berlin.de